



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

Controversias sobre el régimen jurídico de las uniones de

hecho en Aragón

Legal regime's controversies about the common-law

partners in Aragón

Autor

Rubén César Puy Penella

Director

Isaac Tena Piazuolo

FACULTAD DE DERECHO

2017

Índice

I. LISTA DE ABREVIATURAS

II. INTRODUCCIÓN

III. CONCEPTO DE UNIÓN DE HECHO

IV. REGULACIÓN DE LAS UNIONES DE HECHO

4.1 DERECHO COMPARADO

A) Derecho comunitario relativo a las parejas de hecho

B) Legislación de los países europeos

a) Modelo anglosajón

b) Modelo francés

c) Modelo danés

4.2 REGULACIÓN ESTATAL

A) El punto de partida: la Constitución española

B) Las uniones de hecho en el Derecho Civil Común

4.3 REGULACIÓN AUTONÓMICA

A) Regulación en las diferentes autonomías

B) Antigua Ley Aragonesa y actual Código Foral Aragonés

V. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL ARAGONÉS EN RELACIÓN CON LAS UNIONES DE HECHO

5.1 RÉGIMEN DE CONVIVENCIA Y NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA

5.2 EFECTOS PATRIMONIALES DE LA EXTINCIÓN EN VIDA

A) Concepto de desigualdad patrimonial y enriquecimiento injusto

B) Compensación económica por dedicación al hogar

5.3 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR TRAS LA RUPTURA DE LA UNIÓN DE HECHO

5.4 CUSTODIA DE LOS HIJOS EN CASO DE EXTINCIÓN DE LA PAREJA

5.5 EFECTOS EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL CONVIVIENTE

VI. CONCLUSIONES

VII. BIBLIOGRAFÍA

VII. ÍNDICE JURISPRUDENCIAL

I. LISTA DE ABREVIATURAS

art (s).	Artículo (s)
ATC	Auto Tribunal Constitucional
Cc.	Código Civil
CCAA	Comunidades Autónomas
CCat	Código civil de Cataluña
CDFA	Código de Derecho Foral Aragonés
CE	Constitución Española
D ^{o/a}	Don/Doña
FJ	Fundamento jurídico
Nº	Número
PaCS	Pacto Civil de solidaridad
Pág (s).	Página (s)
SAP	Sentencia Audiencia Provincial
Ss.	Siguientes
STC	Sentencia Tribunal Constitucional
STS	Sentencia Tribunal Supremo
TS	Tribunal Supremo
TSJA	Tribunal Superior de Justicia de Aragón
TC	Tribunal Constitucional

II. INTRODUCCIÓN

Los datos estadísticos muestran en los últimos tiempos una clara tendencia favorable a la convivencia en pareja fuera del matrimonio¹. No obstante, y a pesar de que estas estadísticas deben de dársele una veracidad relativa, puesto que ni todas las parejas deben registrarse ni todas efectivamente deciden hacerlo, el hecho de que en alrededor de 25 años el número de parejas de hecho censadas se haya multiplicado por 5 debe darnos una idea del crecimiento de este fenómeno.

El marco regulatorio de las uniones de hecho, hasta fechas recientes, se había visto marcado por un destacable vacío legal, que derivaba irremediablemente en el carácter alegal de estas uniones, siendo ello consecuencia tanto del carácter tradicional imperante hasta épocas recientes en nuestro país como de la propia vocación de flexibilidad y falta de sujeción a norma alguna propio de este tipo de uniones. Sin embargo, en la actualidad, y aunque no existe una regulación legal de conjunto de las uniones de hecho, hay un gran número de leyes autonómicas sobre uniones de hecho, de alcance y contenido muy desigual.

El hecho de que algunas autonomías hayan regulado las uniones de manera que sean semejantes al matrimonio (como en el País Vasco y Galicia²), me ha llamado la atención para estudiar de manera detallada cómo ha afrontado mi Comunidad Autónoma este fenómeno (Aragón). Por ello, el objetivo de este trabajo es, fundamentalmente (además de hacer un repaso sobre el marco legislativo de las uniones de hecho tanto en Europa como en España) analizar las consecuencias jurídicas que puede tener la convivencia *more uxio* en Aragón, en lo relativo a posibles compensaciones económicas que pueda tener la extinción de la misma, así como las medidas relativas a la vivienda familiar, la custodia de los hijos menores o los derechos sucesorios.

1 La encuesta de población activa publicada por el INE en 2016 muestra que en nuestro país 1.578.200 parejas de las 11.144.600 censadas en España son de hecho; esto supone que un 14,16% de las parejas en España son de hecho. Quizá no parezca un número muy elevado, pero hay que tener en cuenta que a principios de los años 90, en 1991, el número de uniones de hecho censadas fue de 221.075, que representaban el 2,4% del total de parejas censadas.

2 «<http://www.notariosyregistradores.com/LEYESEXTRANJERAS/parejasdehecho-parteteorica.htm>» (04/07/2017 20:27)

III. CONCEPTO DE UNIÓN DE HECHO

Cuando nos referimos a las uniones de hecho, estamos haciendo referencia a las situaciones más o menos estables de convivencia entre dos personas, de distinto o del mismo sexo, que no están casadas pero entre las que media lo que un amplio número de leyes determina como «relación de afectividad análoga a la conyugal»³.

Este concepto tan indeterminado ha sido definido en varias sentencias por el Tribunal Supremo. Por ejemplo, la STS de 18 de mayo de 1992 (ECLI: ES:TS:1992:3961) contiene la siguiente caracterización sobre las uniones de hecho: «la convivencia more uxorio ha de desarrollarse en régimen vivencial de coexistencia diaria, estable, con permanencia temporal consolidada a lo largo de los años, practicada de forma externa y pública con acreditadas actuaciones conjuntas de los interesados, creándose así una comunal vida amplia, intereses y fines, en el núcleo de un mismo hogar». En el mismo sentido, la STS de 17 de junio de 2003 (ECLI: ES:TS:2003:4196) establece como requisitos de las uniones de hecho la constitución voluntaria, la estabilidad, la permanencia en el tiempo y la apariencia pública de comunidad de vida similar a la matrimonial.

En relación con estas dos STS, MARTÍNEZ DE AGUIRRE señala una serie de rasgos relativos a las uniones de hecho:

- 1) El carácter de hecho de la relación, basada en una mera situación de convivencia, aunque de esta misma puedan derivar una serie de consecuencias jurídicas.
- 2) La convivencia tiene carácter estable, lo que supone una duración estable en el tiempo quedando excluidas las uniones esporádicas u ocasionales.
- 3) Se da entre los individuos una relación de afectividad definida como «análoga a la conyugal», con la que se alude a la mutua disponibilidad sexual de los convivientes.
- 4) La exclusividad de la relación está limitada a situaciones de convivencia entre dos personas. No obstante, esta exclusividad no exige una obligación de fidelidad entre ambos.
- 5) La convivencia por parte de la unión de hecho debe tener notoriedad pública.
- 6) La libre disolubilidad de la relación, por voluntad unilateral.

³ MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C, *Curso de derecho civil (IV) Derecho de Familia*, 4ª edición, Colex, Madrid, 2013, págs 289 y ss.

IV. REGULACIÓN DE LAS PEREJAS DE HECHO

Bajo este epígrafe se pretende estudiar la regulación de estas uniones a todas las escalas: a nivel europeo (tanto a nivel comunitario como en algunos países que no forman la Unión Europea a nivel individual), estatal (analizando las disposiciones constitucionales y el espacio que les dedica el Código Civil, así como las diferentes leyes civiles) y autonómico (en las diferentes CCAA de nuestro país, tanto las que ostentan derechos forales como las que no y especialmente en Aragón).

4.1 DERECHO COMPARADO

A) Derecho comunitario relativo a las parejas de hecho

En varios países de la UE es posible oficializar tu relación sin casarte, mediante una unión civil o una unión registrada. Este tipo de unión permite a dos personas que conviven en pareja registrar su relación ante la administración correspondiente de su país de residencia. No obstante, las diferencias entre los propios países en este ámbito son enormes, de manera que dependerá de cada país cuestiones como reconocer o no una unión civil contraída en el extranjero, o que la propia unión civil te conceda más o menos derechos. Además, no todos los países de la UE reconocen a las uniones registradas los mismos derechos en cuanto a régimen matrimonial y pensión de alimentos, por lo que los derechos que puedas obtener por el registro de tu pareja de hecho en tu país pueden ser completamente diferentes en otro.

Como norma general, los países que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo suelen reconocer las uniones registradas entre personas del mismo sexo celebradas en otros países. Sin embargo, en los países que no está permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo pero sí se ha introducido alguna forma de unión registrada, el matrimonio en el extranjero entre personas del mismo sexo suele dar los mismos derechos que una unión registrada⁴.

Sin duda, es de especial relevancia el Reglamento (UE) 2016/1104 del Consejo de 24 de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas.

⁴ «http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_es.htm», (20/06/2017 17:02).

Este Reglamento, que entró en vigor el pasado 28 de julio de 2016, y que será aplicable con carácter general a partir del 29 de enero de 2019 (con algunas excepciones), tiene como objeto único los efectos patrimoniales de las uniones registradas, quedando delimitado a las relaciones patrimoniales existentes entre los miembros de la unión registrada y entre estos y terceros, que se derivan de la relación institucionalizada creada por el registro.

Como punto de partida, cabe citar que el citado texto legal define «unión registrada» como régimen de vida en común de dos personas regulado por ley, cuyo registro es obligatorio conforme a dicha ley y que cumple las formalidades jurídicas exigidas por dicha ley para su creación; y, por su parte, «efectos patrimoniales de la unión registrada» como el conjunto de normas relativas a las relaciones patrimoniales de los miembros de la unión registrada entre sí y con terceros, como resultado de la relación jurídica creada por el registro de la unión o su disolución.

Tal y como indica el propio título del Reglamento, en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas aborda temas como la competencia y la ley aplicable, así como el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. No obstante, quedan excluidas de su ámbito, las cuestiones relativas a la capacidad de los miembros de la unión registrada, la existencia, la validez o el reconocimiento de una unión registrada, la obligación de alimentos y la sucesión por causa de muerte de uno de los miembros de la unión registrada⁵.

B) Legislación de los países europeos

a) Modelo anglosajón

En primer lugar, hay que destacar que el derecho matrimonial tanto de Inglaterra como Gales es significativamente distinto al nuestro, puesto que en estos estados los matrimonios están sujetos a la jurisdicción de derecho común y no existe ni Código Civil ni el concepto de régimen económico matrimonial⁶. Una vez conocido esto, lo especialmente relevante es que no existe en Inglaterra una regulación de las relaciones de hecho; lo que se busca es que las partes regulen su situación a través de pactos. No obstante, hay que destacar que en el año 2001 se creó un registro de parejas de hecho, donde pueden inscribirse tanto parejas heterosexuales como homosexuales (ya que hay que recordar que el matrimonio homosexual no está permitido).

5 [«http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/derecho-europeo/normativa-d-e/resumen-del-reglamento-europeo-sobre-uniones-de-hecho-registradas/»](http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/derecho-europeo/normativa-d-e/resumen-del-reglamento-europeo-sobre-uniones-de-hecho-registradas/), (16/06/2017 20:34)

6 [«https://thesauro.wordpress.com/2013/10/10/to-be-or-not-to-be-la-existencia-o-no-de-regimenes-matrimoniales-en-inglaterra-y-gales/»](https://thesauro.wordpress.com/2013/10/10/to-be-or-not-to-be-la-existencia-o-no-de-regimenes-matrimoniales-en-inglaterra-y-gales/), (25/04/2017 16:23)

b) Modelo francés

El Código Civil francés recoge en su redacción tres situaciones afectivas diferentes: el matrimonio, el concubinato y el Pacto Civil de Solidaridad. Los PaCS, tal y como establece el propio Código Francés, son un “contrato celebrado entre dos personas físicas mayores, de sexo diferente o del mismo sexo, para organizar su vida común”. Estos tres tipos de regulación permiten escoger entre algunos derechos mínimos (unión libre) sin formalidad u obligación alguna, un reconocimiento jurídico parcial con formalidades reducidas y deberes limitados (PaCS) o el reconocimiento público pleno, propio al matrimonio, con más amplios derechos y deberes. Además, tanto la unión libre como el PaCS pueden extinguirse por la simple voluntad de una de las partes sin necesidad de intervención judicial como sucede con el matrimonio⁷. Cabe destacar que en el año 2013 se aprobó la Ley que permite el matrimonio entre homosexuales.

c) Modelo danés

El Derecho danés ha sido pionero en la concesión de derechos a parejas homosexuales, puesto que la Ley 372 de 1 de junio de 1989 de Parejas Registradas creó un registro de parejas similar al matrimonial, para parejas de hecho homosexuales, siendo así la primera ley del mundo que permite la inscripción a estas parejas. Esta innovación ha supuesto que en los años siguientes otros países escandinavos como Noruega (en 1993) o Finlandia (en 2002) instauraran leyes similares⁸.

4.2 REGULACIÓN ESTATAL

A) El punto de partida: la Constitución española.

La CE no regula expresamente las parejas de hecho, aunque naturalmente tampoco las prohíbe. Sin embargo, existen una serie de preceptos que legitiman su reconocimiento jurídico, y su existencia se deduce de una serie de artículos como el 10, el 14, el 16, el 18 y fundamentalmente el 39, del que se deriva la obligación de los poderes públicos de protección a la familia⁹.

7 BORILLO, D, «Uniones libres, convivenciales y conyugales en el Derecho francés», en *Revista de derecho privado y comunitario*, 2014, pág 3.

8 «https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_Dinamarca» (03/04/2017 18:29)

9 «<https://www.legalitas.com/abogados-para-particulares/actualidad/articulos-juridicos/contenidos/Las-parejas-de-hecho-en-Espana>», (17/04/2017 17:34)

En concreto, el art 39 CE establece que «los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia». El problema que se plantea es a qué modelo de familia se está refiriendo, puesto que el art. 32 establece el derecho a contraer matrimonio y se plantea la duda de si solo se refería a la familia matrimonial, porque es la única contemplada en la CE, o también a otro tipo de familias como las formadas por parejas estables. A todas estas cuestiones responde la STC 222/1992 (ECLI:ES:TC:1992:222), que afirma que «Nuestra Constitución no ha identificado la familia a la que manda proteger con la que tiene su origen en el matrimonio, conclusión que se impone no sólo por la regulación bien diferenciada de una institución y otra (arts. 32 y 39), sino también, junto a ello, por el mismo sentido amparador o tuitivo con el que la Norma fundamental considera siempre a la familia y, en especial, en el repetido art. 39, protección que responde a imperativos ligados al carácter «social» de nuestro Estado (arts. 1.1 y 9.2) y a la atención, por consiguiente, de la realidad efectiva de los modos de convivencia que en la sociedad se expresen. El sentido de estas normas constitucionales no se concilia, por tanto, con la constricción del concepto de familia a la de origen matrimonial, por relevante que sea en nuestra cultura -en los valores y en la realidad de los comportamientos sociales- esa modalidad de vida familiar. Existen otras junto a ella, como corresponde a una sociedad plural, y ello impide interpretar en tales términos restrictivos una norma como la que se contiene en el art. 39.1, cuyo alcance, por lo demás, ha de ser comprendido también a la luz de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del mismo artículo. Del propio art. 39.1 no cabe derivar, por tanto, una diferenciación necesaria entre familias matrimoniales y no matrimoniales».

Con este fragmento del TC queda claro que la CE trata de proteger a todos los modelos familiares, y que la unión de hecho no deja de ser uno de estos modelos¹⁰. Por otra parte, y en relación con esta STC cabe destacar que el TC ha reconocido un contenido negativo del artículo 32 CE, del que ha derivado el derecho a no contraer matrimonio¹¹.

10 AUNÉS GONZÁLEZ, A.B., «Estudios sobre el ordenamiento jurídico aragonés», Tomo II, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2003, págs. 911 y ss.

11 El FJ 4º de la STC 47/1993 (ECLI:ES:TC:1993:47) de 8 de febrero establece que el derecho a contraer matrimonio constitucionalmente reconocido «no es este un derecho de ejercicio individual, pues no hay matrimonio sin consentimiento mutuo (art. 45 del Código Civil)». El TC continua argumentando que «Si bien la Constitución reconoce el derecho a contraer matrimonio, este derecho no entraña correlativamente, es obvio, un deber u obligación; por lo que tampoco está justificado reprochar a un miembro de una unión matrimonial que no haya contraído matrimonio, cualquiera que sea la causa de tal decisión, ya que el contraerlo o no contraerlo pertenece al ámbito de la libertad de la persona».

B) Las uniones de hecho en el Derecho Civil Común

A pesar de que no existe una normativa estatal dedicada en exclusiva a las uniones de hecho, sí que existen una serie de normas de muy diversa índole que abordan este tema. Como no puede ser de otra manera, la norma que será punto de partida para analizar el Derecho Civil Común será el Código Civil, aunque luego se analizarán otras leyes.

En el Cc encontramos diversos artículos relativos a las uniones de hecho. Quizá uno de los más importantes, y que ha dado lugar a una mayor discusión doctrinal y jurisprudencial, sea el artículo 101 Cc. Este artículo establece que «El derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona». El concepto «convivencia marital» tiene un cierto grado de indefinición y sus interpretaciones son múltiples, por lo que ha tenido que abordar el tema el Tribunal Supremo¹². Más adelante, y en relación con este concepto, encontramos el artículo 320.1^{o13}, permite al Juez conceder la emancipación al menor mayor cuando quien ejerce la patria potestad conviva maritalmente con otra persona distinta del otro progenitor.

También encontramos referencias a las uniones de hecho en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es frecuente encontrar equiparaciones en esta Ley al cónyuge y al conviviente, aunque no utilice concretamente esta expresión. Así, el artículo 757.1 legitima para promover la declaración de incapacidad al «cónyuge o a quien se encuentre en una situación de hecho asimilable». Aunque esta expresión pueda parecer un cajón de sastre, las personas en «situación de hecho asimilable» son única y exclusivamente las que forman parte de una unión de hecho, no estando legitimados otras personas que se ocupen del presunto incapaz, tales como empleadas del hogar o asistentes internas que se encargan de atenderlos¹⁴.

12 La STS 42/2012 (ECLI: ES:TS:2012:624) de 9 de febrero define, aunque con ciertas reservas, el concepto de «convivencia marital». El TS discrepa de la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valladolid, identificando interpretaciones amplias y restrictivas del concepto y aludiendo a cánones interpretativos como la finalidad de la norma o la realidad social. Esta definición de «convivencia marital» afecta a otros preceptos del Cc, como el 320.1^o.

13 El Código Civil establece textualmente *«El Juez podrá conceder la emancipación de los hijos mayores de dieciséis años si éstos la pidieren y previa audiencia de los padres:*
1.º Cuando quien ejerce la patria potestad contrajere nupcias o conviviere maritalmente con persona distinta del otro progenitor».

14 El Auto núm. 207/2002 (ECLI: ES:APGI:2002:1350A) de 31 diciembre, de la Audiencia Provincial de Gerona, niega la legitimación de una empleada del hogar para solicitar la declaración de incapacidad, ya que aunque conviva con el presunto incapaz, es necesario convivir maritalmente con el sujeto.

Por su parte, el artículo 790.1 LEC también alude al concepto «cónyuge o persona que se halle en una situación asimilable». En concreto, este artículo hace referencia al aseguramiento de los bienes de la herencia, otorgando al miembro de la unión de hecho una posición muy similar a la del cónyuge.

Por lo que respecta a otras Leyes que contengan preceptos relativos a las uniones de hecho, cabe destacar la Ley de Arrendamientos Urbanos. El artículo 12, relativo al Desistimiento y vencimiento en caso de matrimonio o convivencia del arrendatario, incluye un apartado 4º donde concede a la persona conviviente en el arrendamiento “en análoga relación de afectividad a la del cónyuge” las mismas prerrogativas que ostenta el cónyuge en los primeros 3 apartados del artículo 12¹⁵. Del mismo modo, la LAU permite al miembro de la unión de hecho subrogarse en el contrato en caso de fallecimiento de su pareja, si ésta fuera el arrendatario (artículo 16.1 b); eso sí, en este caso el precepto exige que haya una convivencia “permanente” con el miembro de la pareja arrendatario, a menos que exista descendencia en común.

4.3 REGULACIÓN AUTONÓMICA

A) Regulación en las diferentes autonomías

Tal como se ha expresado en la Introducción, las uniones de hecho son una materia regulada de manera muy dispar en las diferentes autonomías de nuestro país. Nuestra legislación se caracteriza por la ausencia de una normativa estatal unitaria que de un tratamiento homogéneo a esta cuestión; ante este vacío legal, los que han dado un paso al frente asumiendo esta regulación son los legisladores autonómicos.

Desde 1998, momento de publicación de la Ley de Uniones Estables de Pareja de Cataluña, diferentes CCAA han elaborado normativas relativas a uniones de hecho; sin embargo, este conjunto de normas tienen un contenido muy desigual, lo que provoca una gran incertidumbre principalmente entre parejas de hecho con diferente vecindad civil.

¹⁵ Es reseñable que este precepto contempla expresamente estas prerrogativas tanto a parejas de hecho heterosexuales como homosexuales, ya que el artículo 12.4 LAU establece que estas prerrogativas se aplicarán «con independencia de la orientación sexual».

Ahora bien, ¿tienen todas las CCAA de nuestro país competencia para elaborar Leyes sobre esta materia, o solamente pueden hacerlo aquellas que ostenten derechos civiles forales y especiales? El artículo encargado de dirimir esta cuestión no puede ser otro que el 149 CE. Así pues, el artículo 149.1.8º establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre «la legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo de las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales y especiales, allí donde existan». En cualquier caso, salvo Castilla-León, Castilla La Mancha, La Rioja y Murcia, las restantes autonomías han promulgado leyes reguladoras de la convivencia de hecho, unas como ley independiente, otras incluyéndolas en sus códigos, como Aragón y Cataluña; otras, en fin, como una Disposición adicional de su Ley de Derecho civil, en el caso de Galicia. Además, las comunidades que no han promulgado ley de parejas han creado Registros de parejas de hecho, incluidas la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; registros creados también por centenares de municipios españoles¹⁶.

No obstante, la doctrina distingue claramente en relación a la regulación de las uniones de hecho dos ámbitos diferentes:

1) El de los efectos que se pueden reconocer a esta forma de convivencia frente al Estado y las Administraciones públicas, como son las prestaciones sociales, permisos de residencia o adquisición de la nacionalidad.

b) Los que se producen dentro del estricto marco del Derecho privado, tanto frente a terceros con los que se relacionan los convivientes y entre la propia unión de hecho, siendo relativos los primeros a posibles derechos de un conviviente en la sucesión legal del otro y los segundos a un posible derecho de alimentos, derecho a la titularidad exclusiva o compartida de los bienes adquiridos durante la unión, o el de obtener del otro una indemnización o compensación por desequilibrio al término de la convivencia¹⁷

16 SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, A, La legislación sobre parejas de hecho tras las Sentencias del Tribunal Constitucional 81/2013, de 11 de abril y 93/2013, de 23 de abril, *Revista de derecho civil aragonés*. 2014 pág 185.

17 PARRA LUCÁN, M^a A., *Autonomía de la voluntad y Derecho de Familia*, en *Autonomía de la Voluntad en el Derecho privado*. Consejo General del Notariado, 2012. Tomo I, p. 290

La doctrina coincide en que cualquier autonomía puede promulgar normas que regulen la relación de la pareja de hecho en el ámbito del precedente apartado 1), cuyo carácter es generalmente administrativo; sin embargo el ámbito del apartado 2) abarca materias que forman parte integrante del Derecho civil, y por ello la competencia para legislar sobre ellas están reservadas exclusivamente al Estado o, en su defecto, a aquellas CCAA donde existan derechos civiles forales o especiales, por lo que las restantes carecen de competencia para promulgar leyes en materia de derecho civil.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha llegado a declarar contrarios a la Carta Magna dos artículos de una Ley sobre uniones de hecho dictada por la Comunidad de Madrid¹⁸. El TC argumentó que varios preceptos de esta Ley abarcaban las relaciones jurídico-privadas de las parejas de hecho, al insertarse de lleno en el ámbito de las relaciones personales y patrimoniales de los integrantes de la unión de hecho, teniendo consecuentemente una naturaleza propia de la materia regulada por el Derecho civil. Por tanto, la Comunidad de Madrid no tiene competencia para dictar esta Ley, y estos dos artículos son declarados nulos e inconstitucionales. Una vez conocida esta decisión, parece seguro afirmar que las restantes leyes autonómicas sobre parejas de hecho promulgadas por CCAA que no tienen derecho foral también son inconstitucionales, pero mientras no se presente un recurso de inconstitucionalidad, seguirán estando vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, y aunque no se trate de una cuestión de competencia, es de una importancia fundamental la STC 93/2013 de 23 de abril (ECLI:ES:TC:2013:93). Esta STC declara nulos una serie de artículos de la Ley Foral del Parlamento de Navarra 6/2000 de 3 de julio, ya que se trata de una regulación imperativa de los efectos personales y patrimoniales de las situaciones de convivencia de hecho, por lo que no se respeta el artículo 10.1 CE relativo al libre desarrollo de la personalidad, ya que «el régimen jurídico que el legislador puede establecer al efecto deberá ser eminentemente dispositivo y no imperativo» al no existir una voluntad declarada por las partes de asumir los efectos de la Ley.

¹⁸ Se trata de la STC 81/2013 (ECLI:ES:TC:2013:81), de 11 de abril, que declara inconstitucional los artículos 4 y 5 del Decreto 134/2002, de 18 de julio, que aprobó el Registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid, dictado al amparo de la Ley de la Asamblea de Madrid 11/2001, de 19 de diciembre, de uniones de hecho.

Consecuentemente, esta doctrina asumida por el TC afecta de lleno a otras leyes autonómicas con disposiciones similares que imponen a los convivientes un determinado régimen legal sin contar con su voluntad.¹⁹

B) Antigua Ley aragonesa de Parejas estables no casadas y actual Código Foral Aragonés

Como se ha dicho antes, Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma que promulgó una Ley sobre parejas de hecho, en el año 1998. Aragón fue la segunda CA que lo hizo, mediante la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a Parejas estables no casadas, actualmente no vigente pero integrada de manera completa en el CDFA mediante Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo. Esta Ley ha tenido dos modificaciones: en 2004, donde se reformó el artículo 10 de manera que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar; y también en el año 2010, en lo relativo a la custodia compartida. Un año después, mediante el DL mencionado, pasó a conformar el Título VI del CDFA.

El título IV del Libro II se inicia con la noción legal de las parejas estables no casadas que ofrece el artículo 303, precepto según el cual «se consideran parejas estables no casadas las formadas por personas mayores de edad²⁰ entre las que exista relación de afectividad análoga a la conyugal y que cumplan los requisitos y formalidades que se establezcan en este Código». En atención al propio art. 303, debe entenderse como pareja estable no casada la constituida por dos personas del mismo o diferente sexo unidas por una relación de afectividad análoga a la matrimonial, pretendiendo con este requisito excluir las relaciones meramente laborales, de amistad e incluso de noviazgo²¹.

19 Pueden ser objeto de la misma tacha de inconstitucionalidad el art. 234.1 del Libro Segundo del Ccat y el art. 305 CDFA.

20 Los menores, aunque sean emancipados, no pueden formar una pareja estable. Sin embargo, una persona que no ha alcanzado los 18 años pero que se ha casado, sí podría formar después una pareja estable no casada, puesto que ya es mayor de edad a efectos civiles.

21 DELGADO ECHEVERRÍA, J., *Manual de Derecho civil aragonés conforme al Código del Derecho Foral de Aragón*, 4ª Edición, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, pp 497 y ss.

Para ser pareja estable no casada con reconocimiento de los efectos que le son propios conforme a la normativa aragonesa es necesario que los dos integrantes sean de vecindad civil aragonesa, por aplicación del art. 14 Cc (en relación con la STC 93/2013 (ECLI:ES:TC:2013:93) anteriormente citada, y que como se ha explicado declaraba nula la norma foral navarra). Del mismo modo, si ninguno de ellos es aragonés, no pueden ser reconocidos en Aragón como pareja, pues no les serán aplicables las normas del CDFA y no podrán constituir pareja estable no casada otorgando escritura pública²².

El art. 304 regula el registro administrativo relativo a las parejas estables no casadas, cuya finalidad es acreditar la existencia de esta situación. Se trata de un registro voluntario pero preceptivo para que se le reconozcan a la unión una serie de efectos de carácter administrativo como, por ejemplo, los relativos a la vivienda o asistencia social, e incluso para reconocer el derecho de los supervivientes de las parejas estables a la pensión de viudedad, tal y como se desprende del art. 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social. Tal y como indica DELGADO ECHEVERRÍA²³, este artículo debe interpretarse conjuntamente con el 305 CDFA para diferenciar dos fases en el proceso de formalización de una pareja estable no casada: la primera, que implica el reconocimiento de efectos civiles y precisa de escritura pública de constitución o de convivencia efectiva de al menos dos años; y la segunda, que precisa otorgarle efectos de Derecho público y requiere la inscripción en el registro administrativo.

El art. 305 establece que se considera que hay pareja estable no casada cuando se haya producido la convivencia marital durante un periodo ininterrumpido de dos años, como mínimo, o se haya manifestado la voluntad de constituirla mediante escritura pública. Ahora bien, puede acreditarse la existencia de pareja estable no casada y el transcurso de los dos años de referencia, si no existiera escritura pública, mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, especialmente a través de acta de notoriedad o documento judicial que acredite la convivencia. En cuanto a la capacidad, el art. 306 establece una serie de incompatibilidades lógicas, tales como estar ligado a un vínculo matrimonial, ser parientes en línea recta por consanguinidad o adopción, ser colaterales por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado o ya formar pareja estable con otra persona.

22 DELGADO ECHEVERRÍA, J., *Comentarios al Código del Derecho Foral de Aragón, Doctrina y Justisprudencia*, Dykinson, Madrid, 2015, pp. 465 y ss.

23 DELGADO ECHEVERRÍA, J., *Comentarios al...* cit, pág 466.

Por lo que se refiere a la regulación de la convivencia, y a pesar de no tener un vínculo matrimonial, el art. 307 CDFA faculta a los convivientes para fijar de mutuo acuerdo las reglas por las que habrán de regirse sus relaciones mediante Convenio. Rige el principio de libertad de pactos, siempre y cuando las disposiciones pactadas no sean contrarias a las normas imperativas de derecho aragonés o vayan en contra de la dignidad del otro miembro de la pareja estable. En el supuesto de que los miembros de la unión no hayan otorgado este Convenio, el CDFA establece unos mínimos derechos y deberes de índole patrimonial, como el de contribuir a los gastos comunes en proporción a sus ingresos²⁴.

Quizá uno de los aspectos a destacar de las parejas de hecho es que su consolidación no da lugar a una relación de parentesco, aunque sí genera una serie de derechos sucesorios (en concreto, el ajuar doméstico, con independencia del contenido de la escritura de constitución o del testamento, así como residir gratuitamente en la vivienda habitual del causante durante el plazo de un año) o un derecho de alimentos.

En cuanto a la extinción de la pareja de hecho, las causas de la misma no son especialmente particulares. Naturalmente, cualquier miembro de la pareja estable podrá proceder, unilateralmente, a su revocación, notificándolo fehacientemente al otro. En caso de extinción de la unión, ambos están obligados a dejar sin efecto la escritura pública que, en su caso, se hubiera otorgado; ahora bien, si se produce una extinción, las partes no pueden volver a formalizar una pareja estable no casada mediante escritura pública hasta que hayan transcurrido seis meses desde que dejaron sin efecto el documento público correspondiente a la convivencia anterior. Naturalmente, con la extinción de la pareja estable se revocan todos los poderes que cualquiera hubiera otorgado a favor del otro.

Sin duda, el aspecto más relevante de esta regulación lo encontramos en el artículo 310 CDFA. Se trata de los efectos patrimoniales que tiene la extinción en vida de la pareja estable no casada: así, en casos donde la convivencia ha supuesto una situación de desigualdad patrimonial entre ambos, y se haya producido un enriquecimiento injusto, podrá exigirse una compensación económica en una serie de casos²⁵. Esta va a ser la cuestión a tratar posteriormente, analizando cómo aplican los Tribunales aragoneses este artículo y las obligaciones generadas por la extinción de la pareja estable no casada.

24 DELGADO ECHEVERRÍA, J., *Manual de Derech...* cit, págs 499 y 500.

25 En concreto, puede exigirse esta compensación en dos supuestos:

«a) Cuando el conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja estable no casada.
b) Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se ha dedicado al hogar, o a los hijos del otro conviviente, o ha trabajado para este».

V. ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL ARAGONÉS EN RELACIÓN CON LAS UNIONES DE HECHO

Las uniones "more uxorio", cada vez más numerosas, constituyen una realidad social la cual el legislador no aborda completamente (puesto que carece, por ejemplo, de normativa legal en el Código Civil), pero produce o puede producir una serie de efectos que tienen trascendencia jurídica y deben ser resueltos con arreglo al sistema de fuentes del Derecho que, cuando reúnen determinados requisitos -constitución voluntaria, estabilidad, permanencia en el tiempo, con apariencias públicas de comunidad de vida similar a la matrimonial- han merecido el reconocimiento como una modalidad de familia, aunque sin equivalencia con el matrimonio, por lo que en general no cabe sino más trasponerle el régimen jurídico de éste, de modo especial por lo que se refiere a su aspecto económico y división patrimonial una vez cesada la convivencia, pero sin que tampoco la Jurisprudencia haya olvidado regular sus efectos una vez extinguida la unión

5.1 RÉGIMEN DE CONVIVENCIA Y NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA

Como ya se ha dicho anteriormente, los efectos de la constitución de una pareja pueden fijarlos sus integrantes, pero solo serán eficaces si se emiten en escritura pública, por lo que si no está elevado las normas de aplicación a la pareja serán las del art. 307 CDFA. En concreto, la norma aragonesa establece supletoriamente que los miembros de la pareja estable contribuirán al mantenimiento de la vivienda y gastos comunes en proporción a sus ingresos respectivos, y lo harán de acuerdo con sus patrimonios, sin perjuicio de que cada uno conserve la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes.

¿Cuáles deben ser considerados gastos comunes? Según la norma aragonesa, tendrán esta consideración los gastos necesarios para el mantenimiento de la propia pareja así como el de los hijos comunes o no que convivan con ellos, incluyendo el derecho a alimentos, educación, atenciones médico-sanitarias y vivienda. Esto no queda aquí, sino que el propio texto obliga a ambos miembros de la pareja a responder solidariamente ante terceras personas de las obligaciones contraídas por estos gastos, siempre que estos se adecúen a los usos sociales.

No obstante, los efectos supletorios que regula este artículo solo aluden al aspecto patrimonial, y no al personal, por lo que cada miembro conserva la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes y no se forma automáticamente un patrimonio común. Tal y como indica la autora ALONSO PÉREZ²⁶, al regular el CDFA la manera de hacer frente a los gastos comunes se están mezclando dos problemas distintos: el uso de los ingresos como parámetro para precisar en qué medida se debe contribuir al sostenimiento (al establecerse que se hará de manera proporcional a ellos). La confusión viene después, al establecerse que si los ingresos no son suficientes para afrontar los gastos comunes, debe contribuirse de acuerdo a sus respectivos patrimonios. La autora plantea dos posibilidades: que el CDFA vincule los bienes de cada miembro de la unión a los gastos comunes si los ingresos no son suficientes; o que el propio patrimonio es un parámetro añadido al de los ingresos para fijar la proporción en que cada uno debe contribuir a los gastos comunes. Sin duda, no atender a los patrimonios para fijar la medida en que deben contribuir a los gastos comunes resultaría injusto, cuando un miembro tenga ingresos muy superiores a los del otro que, por su parte, ostenta un gran patrimonio.

En materia jurisprudencial, es destacable la SAP de Zaragoza 241/2016 (ECLI: ES:APZ:2016:2277), en lo relativo a la conservación de bienes en defecto de pacto. En particular, el caso trata sobre una ruptura de la pareja estable no casada, donde la actora solicitaba al demandado la declaración de copropiedad de la vivienda y un apartamento adquirido en la costa, tras una relación de 17 años. El Tribunal recuerda en este sentido que el art. 307-3-2º CDFA reconoce a los convivientes el derecho a conservar la propiedad, administración y disfrute de sus propios bienes, por lo que si éstos no han pactado ningún tipo de régimen para regular sus relaciones económicas, se regirán por la regla de la separación absoluta de patrimonios. Por ello, y al no haber regulado nada la pareja, los bienes que cada miembro adquiriera durante la convivencia tendrán la condición de propios, de manera que al figurar los inmuebles requeridos a nombre del demandado, y sin especificación de aportación o participación alguna a favor de la recurrente, no puede alterarse su régimen de propiedad.

26 DELGADO ECHEVERRÍA, J., *Comentarios al...* cit, pág 470.

5.2 EFECTOS PATRIMONIALES DE LA EXTINCIÓN DE LA PAREJA ESTABLE EN VIDA

Las consecuencias de la ruptura de una pareja estable pueden estar previstas en el pacto de relaciones familiares regulado en el art. 77 CDFA, el cual puede ir referido a las relaciones familiares y aplicable a las parejas estables con hijos a cargo, así como en el convenio de convivencia aplicable a las parejas sin descendencia del art. 307 CDFA. Estos pactos podrán referirse a la liquidación del patrimonio adquirido durante la convivencia, al reconocimiento de pensiones o indemnizaciones y a la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

En defecto de esto, el CDFA reconoce a los convivientes unos derechos de índole indemnizatoria, distinguiendo si ha habido descendencia común o no. Así, la asignación económica del art. 83 corresponde a todas aquellas parejas con hijos comunes, ya sean matrimonio o mera pareja de hecho; en cambio, cuando no haya hijos, procede la compensación económica del art. 310, aplicable exclusivamente a las parejas estables no casadas y no a los matrimonios. Dicha compensación se configura como una prestación dirigida a compensar la situación de desequilibrio patrimonial producida durante la convivencia, que implique un enriquecimiento injusto, que además debe obedecer a unos presupuestos determinados:

«Cuando un conviviente ha contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja estable no casada.

Cuando el conviviente, sin retribución o con retribución insuficiente, se ha dedicado al hogar, o a los hijos del otro conviviente, o ha trabajado para éste».

Ahora bien, ¿qué significa exactamente «desigualdad patrimonial y enriquecimiento injusto»? Esta cuestión será tratada en el siguiente apartado. Del mismo modo, se procederá a analizar cómo y cuándo entiende el Tribunal aragonés que procede una compensación económica por dedicación al hogar. En cualquier caso, la indemnización sólo puede reclamarse en el plazo de un año a contar desde la ruptura de la pareja y, en todo caso, habrá de ponderarse en función de la duración de la convivencia (art. 390.2)²⁷.

²⁷ DELGADO ECHEVERRÍA, J., *Manual de Derech...* cit, pág 502.

A) Concepto de desigualdad patrimonial y enriquecimiento injusto

La antigua legislación aragonesa, en su artículo 7 de la Ley de «parejas estables no casadas» ya recogía el concepto de «enriquecimiento injusto», y distinguía 2 supuestos: La contribución económica -directa o indirecta- a la adquisición, conservación o mejora de un bien común o privativo de la pareja; y la dedicación especial al hogar o a los hijos. Estas dos variables son reiteradas por el CDFA en su artículo 310.

El concepto de «enriquecimiento injusto» goza de una consolidada doctrina jurisprudencial que establece los requisitos para que pueda ser reconocida²⁸:

«1) Un enriquecimiento por parte del demandado, que puede producirse por aumento de patrimonio o por una no disminución del mismo.

2) Correlativo empobrecimiento del actor representado también por un daño positivo o un lucro frustrado.

3) Relación de causa a efecto o conexión entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, esto es, que el enriquecimiento y correlativo empobrecimiento se produzca por virtud del traspaso directo del patrimonio del actor al del demandado

4) Falta de causa que justifique el enriquecimiento; y,

5) Inexistencia de precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa».

De este modo, tal y como indica la SAP de Zaragoza nº 579/2006 (ECLI: ES:APZ:2006:2877), para que proceda una concesión económica invocando este artículo es imprescindible apreciar la existencia de un desequilibrio patrimonial entre los convivientes, que derive precisamente de la ruptura, y que ha de ser valorado comparando la situación en que queda cada uno de los miembros de la pareja con que la tenía durante el tiempo que duró la convivencia, no con que la podía tener con anterioridad a que fuera constituida.

²⁸ En concreto, la SAP de Zaragoza nº 452/2001 (ECLI: ES:APZ:2001:1718) , de 9 de julio establece los criterios en el texto descritos. Aunque no se trate de una unión de hecho el litigio que la Sentencia dirime, la definición del concepto es perfectamente extrapolable a otras situaciones.

Por otra parte, y en relación con el requisito 2º más arriba indicado relativa al lucro cesante del actor, es de especial interés la SAP de Zaragoza, 296/2010 (ECLI: ES:APZ:2010:1179), de 11 de mayo, la cual señala que «el enriquecimiento, como advierte la mejor doctrina, se produce no sólo cuando hay un aumento del patrimonio o la recepción de un desplazamiento patrimonial, sino también cuando se da una no disminución del patrimonio ("damnum cessans"); y que el empobrecimiento no tiene por qué consistir siempre en el desprendimiento de valores patrimoniales, pues lo puede constituir la pérdida de expectativas y el abandono de la actividad en beneficio propio por la dedicación en beneficio del otro».

Es decir, la aplicación de este precepto no se circunscribe única y exclusivamente a un aumento en el patrimonio de una de las partes, sino que puede también invocarse alegando la pérdida de expectativas y el abandono de la actividad profesional por parte de uno de los convivientes en favor del otro.

B) Compensación económica por dedicación al hogar

Como punto de partida, hay que destacar que autores como SEOANE PRADO²⁹ (Magistrado. Audiencia Provincial secc. 5ª de Zaragoza) argumentan que la norma no dice la clase de compensación que puede ser otorgada al cónyuge empobrecido, por lo que no hay necesariamente la compensación debe ser limitada en una suma de dinero a tanto alzado, con exclusión de cualquier otra atribución patrimonial, puesto que para los casos de unión de hecho el TS en aplicación del artículo 97 Cc, así como en aplicación del principio del enriquecimiento injusto o de protección al más débil de los convivientes, ha otorgado indistintamente una pensión mensual, indemnización compensatoria (STS 327/2001 ECLI: ES:TS:2001:2513), e incluso una participación en los bienes adquiridos durante la convivencia por el otro miembro de la pareja (STS 5/2003 ECLI: ES:TS:2003:122).

Una vez conocido que la compensación puede ser de cualquier naturaleza, es preciso analizar cómo interpretan el precepto los Tribunales aragoneses. En el caso que ocupa, es especialmente reveladora la Sentencia 597/2007 (ECLI: ES:APZ:2007:1970) de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

²⁹ SEOANE PRADO, «Los efectos jurídicos de las parejas estables en Aragón», en *Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés*, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2013, pág 395.

En esta resolución, el asunto llega a la Audiencia Provincial tras un recurso de apelación de la parte actora contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Zaragoza nº 1618/06. La parte actora la compone D^a María Milagros, la cual mantuvo una convivencia «more uxorio» con D^o Ángel Jesús durante 4 años y medio, surgiendo de esta relación un hijo de casi 4 años de edad. La actora solicitaba una compensación de 70.778,36 euros, calculados de la siguiente manera: el sueldo mensual que venía cobrando la demandada es multiplicado por los meses que transcurren desde que ella se da de baja en aquella empresa (para supuestamente dedicarse al hogar familiar) hasta la ruptura de la convivencia.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó por completo la pretensión de D^a María Ángeles, no reconociéndole ningún tipo de prestación. ¿Qué es lo que dice la Audiencia Provincial en este caso? ¿Tiene derecho la actora a una compensación, y si lo tiene, cómo debe calcularse dicha prestación?

La SAP recuerda que los requisitos que hacen posible esta compensación son dos: en primer lugar, que la convivencia haya supuesto «una situación de desigualdad patrimonial entre ambos convivientes que implique un enriquecimiento injusto»; y, en segundo lugar, que el conviviente que solicita la pensión haya contribuido económicamente o con su trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro conviviente, o que el solicitante, sin retribución o con retribución insuficiente, se haya dedicado al hogar, o a los hijos comunes o del otro conviviente, o haya trabajado para éste. Esto hace necesario que uno de los convivientes haya adquirido durante su permanencia un patrimonio determinado y el otro nada o menos que su pareja, y, además, que ese desequilibrio patrimonial sea injusto, en el sentido de que el patrimonio que lo provoca haya sido adquirido a costa del otro, con aprovechamiento de su contribución económica, de su dedicación al hogar e hijos o de un trabajo que no haya sido retribuido o lo haya sido insuficientemente.

El Juez de Primera Instancia afirmó que el enriquecimiento injusto que la actora invocó como presupuesto de la compensación reclamada era inexistente, ya que la demandante fue despedida de su trabajo a los ocho meses de iniciarse la convivencia, cobrando el paro durante los quince meses siguientes. Además, era necesario evaluar la situación de D^o Ángel Jesús, la cual según sus declaraciones de renta y documentos contables desde 2002 no reflejaban «una situación boyante», y sin que el comienzo de su actividad empresarial por cuenta propia en 2004 «haya supuesto un incremento desmedido de ingresos, ni sea fuente de un patrimonio personal que no ha quedado reflejado en autos», por mas que su situación económica le permitiese afrontar en solitario los gastos educativos de su hijo.

En contra de este razonamiento, la Audiencia Provincial sí estima que se ha producido una mejora en la situación patrimonial del demandado, aseverando que su situación económica «ha de tenerse por favorable». Una vez conocido esto, se trata de averiguar si el enriquecimiento del demandado se obtuvo, como argumenta la demandante, valiéndose el demandado de su dedicación al hogar y la familia, con detrimento de su vida profesional y del sueldo que en otro caso hubiera percibido. El Tribunal cita al TS (STS 12-9-05 y STS 17-6-03), señalando lo explicado en el epígrafe anterior, aseverando que el enriquecimiento injusto «no tiene por qué consistir siempre en el desprendimiento de valores patrimoniales, pues lo puede constituir la pérdida de expectativas y el abandono de la actividad en beneficio propio por la dedicación en beneficio de otro».

Por ello, es relevante el hecho de que la pareja, tras el nacimiento del niño, decidió de común acuerdo que D^a María Milagros dejaría su trabajo para dedicarse a su cuidado y a la llevanza del hogar, e incluso que en un momento posterior, habiéndole salido a aquella un trabajo, D. Ángel Jesús, a la vista de la remuneración ofrecida, le hizo abandonar su inicial idea. En consecuencia, la SAP sí reconoce el derecho de la demandada a obtener una compensación, pero no de la manera que pretende calcularla. D^a María Milagros no tiene en cuenta las deducciones que debió hacer por alimentación, vestido y gastos ordinarios en el periodo abril 2002 a diciembre 2005, o los 1803,04 € netos que el SAMA le reconoció en el acto de conciliación, así como las prestaciones de desempleo que ella misma percibió durante casi un año cuando convivía con el demandado. Por todo ello, el Tribunal fija la cuantía de la indemnización en 15.400 €, teniendo en cuenta -la duración de la convivencia (44 meses) y estableciendo una compensación razonable de 350 € por mes convivido, muy alejado de los 1608,60 € por mes que solicitaba la actora.

Hay que recordar que el establecer la cuantía de la compensación no es, generalmente, sencillo. El propio CDFA designa como criterio de graduación la duración de la convivencia, pero los Tribunales han manifestado que éste no puede ser el único parámetro, «pues si el elemento determinante del nacimiento del derecho a esta compensación es el desequilibrio, habrá de tenerse también en cuenta en qué medida se ha producido, aún cuando no pueda hacerse tal valoración en términos contables, como si se trata de un libro de haber y debe, dada la complejidad de toda relación convivencial de pareja, en la que no sólo importan aspectos crematísticos»³⁰.

5.3 SITUACIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR TRAS LA RUPTURA DE LA UNIÓN DE HECHO

Uno de los puntos más conflictivos que presentan las uniones de hecho es el relativo a las consecuencias relativas a la situación de la vivienda familiar una vez rota la unión. El CDFA establece una previsión de esta cuestión cuando se da una ruptura de la convivencia, ya sea matrimonial o no, y se tengan hijos comunes. En estas condiciones, el art. 77 CDFA atribuye prioridad al pacto de relaciones familiares entre los progenitores afectados por la ruptura. Así, cabe que ambos progenitores convengan, entre otros extremos, sobre el uso o, más ampliamente, el destino de la vivienda familiar. Es relevante destacar que si este es aprobado por el Juez, por no ser contrario a norma imperativa o no resultar perjudicial al interés de los hijos, habrá de respetarse necesariamente (art. 77.5).

En defecto de pacto de relaciones familiares o si éste no es aprobado por el Juez, corresponde al propio Magistrado decidir esta cuestión conforme a las previsiones del art. 81 CDFA. Dicho precepto contiene tres normas diferentes. En primer lugar, fija los criterios de atribución del uso de la vivienda familiar en función del régimen de custodia adoptado (aptdos. 1 a 3); en segundo término, articula un sistema judicial de venta de la misma (aptdo. 4); y, por último, regula el destino del ajuar familiar (aptdo. 5)³¹.

30 Se está citando la SAP de Zaragoza nº 468/2012 (ECLI: ES:APZ:2012:2119).

31 LÓPEZ AZCONA, A., «La atribución del uso de la vivienda familiar en caso de ruptura de la convivencia en el derecho aragonés: Derecho positivo y práctica jurisprudencial», en *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 3 bis, noviembre 2015, págs. 47-50.

Por otra parte, el legislador aragonés ha decidido abordar exclusivamente los efectos de la ruptura de la convivencia con hijos a cargo, decidiendo no regular los supuestos de ruptura de las parejas sin hijos o con hijos mayores independientes económicamente. Al igual que antes, nada impide a la pareja llegar a un acuerdo sobre este extremo en virtud del pacto de relaciones familiares, habida cuenta los amplios términos en que se expresa el art. 77.2.d CDFA; sin embargo, en defecto de acuerdo, el art. 81 CDFA no da una solución a esta cuestión. Ante esta situación, en la doctrina se ha planteado la posibilidad de aplicar de manera analógica el art. 96 CC³² (al que da entrada el art. 1.2 CDFA) a los supuestos de ruptura de pareja de hecho.

Por ejemplo, PÉREZ UREÑA³³ opina que las normas sobre el uso de la vivienda familiar que contiene el Código Civil en relación con el matrimonio deben ser prolongadas más allá de su estricto ámbito, en particular a situaciones como «la convivencia prolongada de un hombre y una mujer como pareja ya que las razones que abonan y justifican aquéllas valen también en este último caso». Sin embargo, CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA³⁴ afirma que en caso de que se aplicará este artículo a las uniones de hecho, se trataría más bien de una aplicación directa de dicha norma, y no por analogía ni por interpretación extensiva.

Bajo mi punto de vista, lo más acertado en este caso es aplicar analógicamente este precepto a las uniones de hecho. Si bien es cierto que estamos hablando de una regulación contenida en el Capítulo IX del Título IV, cuya rúbrica es «del matrimonio», lo más acertado, independientemente de que los progenitores hayan contraído matrimonio o no, es seguir esta regla, pues debe preservarse el interés superior del menor. Los Tribunales, que en un primer momento se mostraron algo reticentes a esta aplicación correlativa, han ido aceptando de manera progresiva esta aplicación argumentando un interés superior del descendiente menor de edad.

32 Recordemos que este art. establece que, en defecto de acuerdo de los cónyuges, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

33 PÉREZ UREÑA, A.: «La atribución del uso de la vivienda familiar ante la crisis de las «uniones de hecho» desde la praxis judicial. El art. 96 CC y el juicio verbal por precario en la nueva LEC», en *Revista de Derecho de familia*, núm. 18, 2003, págs. 55-66

34 CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, G.: «Atribución de la vivienda familiar en las parejas de hecho tras su ruptura: ¿siempre en precario? ¿siempre sin aplicar el art. 96 CC?», en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, núm. 28, 2012.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en un primer momento, no se mostró favorable a esta aplicación analógica del art. 96 CC, siendo especialmente reveladora en un primer momento la argumentación de la STS 212/1998 (ECLI: ES:TS:1998:1600), de 10 de marzo, que entiende que «se trata de una situación que es de trascendencia jurídica, derivada de una situación de hecho no regulada por ley. Ni, desde luego, por costumbre. Con lo que es preciso acudir a los principios generales del derecho, última fuente formal del sistema de fuentes en el ordenamiento jurídico, como dispone el art. 1.1 del Código Civil y matiza el apartado 4 del mismo artículo». Y, una vez introducidos estos principios, el TS consideró aplicable el principio de protección al conviviente perjudicado por la situación de hecho, derivado de los arts. 10, 14 y 39 CE. Postura que ha ido evolucionando hacia la admisión, en algunos casos, de la aplicación analógica del art. 96 CC³⁵.

Ya en resoluciones más recientes, la STS 221/2011 (ECLI: ES:TS:2011:2053), de 1 de abril no deja ninguna duda en cuanto a la aplicación analógica del art. 96 CC. Esta sentencia contempla un supuesto de hecho donde existe una pareja de convivientes, de la que nace un hijo y donde cuentan con una vivienda familiar propiedad de ambos por mitades indivisas. La mujer presenta una demanda de juicio verbal, donde pretende que se le otorgue la guarda y custodia exclusiva del menor, así como el uso de la vivienda familiar (entre otras medidas); frente a ello, el hombre presenta recurso de apelación, que es admitido parcialmente por la Audiencia Provincial, en el sentido de confirmar la resolución recurrida, con la sola excepción de la medida relativa al uso de la vivienda familiar, declarando la procedencia de la limitación temporal de dicho uso hasta el momento en que se proceda a la división y disolución de los bienes comunes de ambas partes. Finalmente, la mujer recurre en casación, alegando interés casacional por infracción de los arts. 90, 91 y 96 CC, así como la doctrina jurisprudencial que sostiene que el criterio de mantener el uso y disfrute de la vivienda familiar es preferente sobre el derecho a la extinción del dominio.

El TS entiende que es procedente la aplicación analógica del art. 96.1 CC a este supuesto, en el que prima, además, el interés superior del menor. Tanto es así que la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor (el cual se estudiará de manera más profunda en el siguiente apartado relativo a la custodia de los hijos menores una vez extinguida la pareja estable), que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el art. 96 CC. Puede sacarse en claro que la solución jurídica que se aplica a la pareja de hecho con hijos menores de edad es exactamente la misma que a un matrimonio, por lo

35 UREÑA CARAZO, B: «Ruptura de la pareja de hecho y uso de la vivienda familiar: análisis de la jurisprudencia más reciente», en *Diario La Ley*, 5532/2015, págs 4-6.

que podríamos afirmar que se produce una equiparación jurídica. En consecuencia, lo que el TS afirma es que esta norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los hijos menores mientras sigan siéndolo, ya que el interés que se protege no es la propiedad de los bienes sino los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de la pareja. Por ello, una interpretación correctora de esta norma, permitiendo la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría siempre la vulneración de los derechos de los hijos menores³⁶.

Por último, cabe hacer referencia a que el Derecho aragonés, tal y como resulta del análisis del art. 81.3 CDFA, configura el derecho de uso de la vivienda familiar como un derecho de carácter temporal o provisional (aunque sólo en las atribuciones de la vivienda familiar en los supuestos de ruptura con hijos menores). Esto supone un claro desmarque del régimen previsto en el art. 96 CC, el cual no contempla la fijación de un límite temporal del uso de la vivienda familiar³⁷. Por contra, como se acaba de señalar, en Derecho aragonés la atribución del uso de la vivienda familiar a uno de los progenitores debe tener necesariamente una limitación temporal que, a falta de acuerdo entre ambos, fijará el Juez teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada familia. El TSJA³⁸ ha argumentado en este sentido que el propósito del precepto es eludir conflictos entre los progenitores, así de como de no lesionar el interés del progenitor no usuario si es propietario o copropietario de la vivienda. Tal es la situación que el TSJA de Aragón ha llegado a aplicar esta medida de manera retroactiva, con base en la Disposición Transitoria 6ª.1 CDFA³⁹, revisando sentencias anteriores a la Ley 2/2010 donde no se fijaba límite alguno o se acordaba un límite incierto como la independencia económica de los hijos⁴⁰.

36 UREÑA CARAZO, B: «Ruptura de la pareja de hecho...» *cit*, p. 5.

37 El TS en la STS 499/2012 (ECLI: ES:TS:2012:5674) ha excluido las limitaciones temporales de uso que puedan afectar a los hijos menores de edad

38 El TSJA dictaminó textualmente en las resoluciones 27/2014 (ECLI: ES:TSJAR:2014:895) y 33/2014 (ECLI: ES:TSJAR:2014:1384) que «el legislador aragonés no ha querido dejar en la indeterminación la necesaria liquidación de los intereses económicos o patrimoniales de los progenitores, ya que no en todos los casos existen razones atendibles para un uso de larga duración, y menos para acordar un uso ilimitado, pues la subsistencia de vínculos de tal naturaleza constituye de ordinario fuente de conflictos, además de que puede lesionar el interés del otro si es propietario o copropietario de la vivienda».

39 Esta disposición transitoria establece la revisión de los convenios reguladores y de las medidas judiciales adoptadas con anterioridad al 8 de septiembre de 2010, fecha de entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 26 de mayo, en lo que respecta a la Sección 3ª del Capítulo II del Título II (arts. 75 a 84 CDFA).

40 LÓPEZ AZCONA, A., «La atribución del uso...» págs. 77 a 79.

5.4 CUSTODIA DE LOS HIJOS EN CASO DE EXTINCIÓN DE LA PAREJA

De importancia crucial es también la cuestión relativa a la custodia de los hijos en caso de ruptura de una pareja estable no casada. Como punto de partida en esta cuestión, debemos tener en cuenta el art. 76.2 CDFA, que establece que toda decisión, resolución o medida que afecte a los hijos menores de edad se adoptará en atención al beneficio e interés de los mismos. No obstante, este es un criterio un tanto indeterminado, ya que no siempre es sencillo conocer dicho interés del menor. Por ello, el TSJA ha tenido que pronunciarse acerca de esta cuestión en la Sentencia 1/2016 (ECLI: ES:TSJAR:2016:4)⁴¹, donde se establece lo siguiente:

«El interés del menor (...) es un concepto jurídico indeterminado que precisamente ha de ser determinado en cada caso. La noción de "interés del menor" no es ni un dogma, ni un estándar de contenido universal. Debe ser interpretada y aplicada caso por caso (de ahí que aporte poco la cita de sentencias anteriores en las que se optó por soluciones distintas) evitando siempre eventuales arbitrariedades.

El Preámbulo de la reciente Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia lo expresa así:

Este concepto se define desde un contenido triple. Por una parte, es un derecho sustantivo en el sentido de que el menor tiene derecho a que, cuando se adopte una medida que le concierna, sus mejores intereses hayan sido evaluados y, en el caso de que haya otros intereses en presencia, se hayan ponderado a la hora de llegar a una solución. Por otra, es un principio general de carácter interpretativo, de manera que si una disposición jurídica puede ser interpretada en más de una forma se debe optar por la interpretación que mejor responda a los intereses del menor. Pero además, en último lugar, este principio es una norma de procedimiento. En estas tres dimensiones, el interés superior del menor tiene una misma finalidad: asegurar el respeto completo y efectivo de todos los derechos del menor, así como su desarrollo integral.

⁴¹ Esta resolución del TSJA es mencionada frecuentemente en otras posteriores donde se dirime esta cuestión relativa al interés del menor (por ejemplo, en la Sentencia TSJA 4/2016 ECLI: ES:TSJAR:2016:87).

A la luz de estas consideraciones, es claro que la determinación del interés superior del menor en cada caso debe basarse en una serie de criterios aceptados y valores universalmente reconocidos por el legislador que deben ser tenidos en cuenta y ponderados en función de diversos elementos y de las circunstancias del caso, y que deben explicitarse en la motivación de la decisión adoptada, a fin de conocer si ha sido correcta o no la aplicación del principio». Por tanto, cabe extrapolar de esta resolución que no hay una solución uniforme para determinar el interés del menor, sino que tenemos que examinar cada una de las condiciones del caso para conocer la decisión más acertada.

Por otra parte, y una vez conocido que toda resolución relativa a los menores se adoptará teniendo en cuenta su beneficio, es reseñable añadir que el artículo 80.2 del CDFA considera que, con carácter general, la custodia compartida es el sistema idóneo con el que satisfacer el interés del menor. Este art. también ha sido interpretado por el TSJA (Sentencia 4/2012 ECLI: ES:TSJAR:2012:108), del que podemos sacar conclusiones muy importantes:

1) La custodia compartida por parte de ambos progenitores es el régimen preferente y predeterminado por el legislador, en busca de ese interés del menor, en orden al pleno desarrollo de su personalidad, de modo que se aplicará esta forma de custodia siempre que el padre y la madre estén capacitados para el ejercicio de las facultades necesarias a tal fin;

2) Sin embargo, el sistema no es rígido, salvo en un mandato que dirige al juez: el superior interés del menor. Esto significa que podrá establecerse un sistema de custodia individual, cuando éste resulte más conveniente para dicho interés, a cuyo efecto habrá de evaluar los parámetros establecidos en el art. 80.2 del Código;

3) Si se decide adoptar una custodia individual, es necesario acreditar un verdadero interés del menor frente al criterio preferente de la custodia compartida, al que el precepto legal otorga tal preferencia en interés de los hijos menores. El Tribunal que acuerde apartarse del sistema preferentemente establecido por el legislador debe razonar suficientemente la decisión adoptada. Para adoptar la decisión, serán relevantes las pruebas practicadas, especialmente los informes psicosociales (mencionados en el art. 80.3 CDFA) e incluso la opinión de los hijos menores, cuando tengan suficiente juicio (art. 80.2 CDFA).

Se dan numerosos litigios donde uno de los progenitores pretende obtener la custodia individual del menor, pero lo que ocurre normalmente es que los Tribunales de superior instancia a los que se recurre reiteran la resolución dictada en un primer término. Por ejemplo, en la SAP Zaragoza 23/2017 (ECLI: ES:APZ:2017:97) y en la SAP 346/2017 (ECLI: ES:APZ:2017:889) ocurre lo anteriormente señalado, afirmando el Tribunal que «si ambos progenitores tienen recursos personales para afrontar el cuidado del menor, presentan habilidades adecuadas para controlar su conducta estableciendo normas y límites, fomentar su socialización y estimular sus capacidades», no cabe alterar el régimen de custodia.

En conclusión, a la hora de asignar la custodia de los hijos tras la extinción de la pareja de hecho (al igual que si se tratara de un divorcio), lo que primará en todo caso es el interés del menor recogido en el art. 76.2 CDFA. De igual modo, el modelo general será el de custodia compartida, pudiendo asignar custodia individual cuando el interés del menor lo recomiende, siendo necesario un razonamiento por parte del Tribunal si decide decantarse por este modelo.

5.4 EFECTOS EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL CONVIVIENTE

En caso de que la extinción de la pareja se produzca por causa del fallecimiento de uno de los sus miembros, el art. 311 CDFA le reconoce unos limitados efectos sucesorios entre ellos:

«1. En caso de fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, el supérstite tendrá derecho, cualquiera que sea el contenido de la escritura de constitución, del testamento o de los pactos sucesorios, al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con exclusión solamente de las joyas u objetos artísticos de valor extraordinario o de los bienes de procedencia familiar.

2. Asimismo, el supérstite podrá, independientemente de los derechos hereditarios que se le atribuyan, residir gratuitamente en la vivienda habitual durante el plazo de un año.»

Al margen de los derechos sucesorios que el testamento, los pactos sucesorios o el acuerdo de constitución de la pareja atribuyan al miembro de una pareja estable no casada en caso de fallecimiento del otro, este art. reconoce al superviviente el derecho a residir gratuitamente en la que fuera vivienda habitual de la pareja durante el plazo de un año, y además «el derecho a los muebles útiles e instrumentos de trabajo que fueran el ajuar de la vivienda habitual».

Por lo que respecta al derecho a residir en la vivienda habitual, el supuesto excluye los casos en que quien sobrevive es su propietario y aquéllos en los que la pareja viviera en domicilios diferentes y cada miembro costeara su propia vivienda; por su parte, también debe excluirse el caso en el que siendo la vivienda propiedad del fallecido éste haya atribuido mortis causa y eficazmente la propiedad de la vivienda al que sobrevive. Naturalmente, deben excluirse de este concepto otras viviendas distintas de la habitual que la pareja destinara a tiempo de ocio. El derecho se atribuye de manera gratuita, por lo que el que adquiera la propiedad de la vivienda mortis causa debe tolerar el ejercicio de ese derecho. Por otro lado, en lo que concierne al derecho a los muebles, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, hay que entender que se atribuye el derecho de propiedad de los bienes. Se excluyen joyas u objetos de extraordinario valor que sean de procedencia familiar⁴².

No obstante, y aunque los preceptos parezcan bastante claros, es necesario hacer varias matizaciones en cuanto al contenido de estos preceptos. Por lo que respecta al primer apartado, relativo al ajuar de la vivienda habitual, es de especial interés la SAP de Huesca nº 26/2016 (ECLI: ES:APHU:2016:48). En un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Monzón en los autos de Juicio Ordinario nº 340/12 había declarado que la superviviente de una pareja estable no casada no tenía derecho a la propiedad de una serie de bienes como una serie de sillas, vajilla y cubertería, un mueble zapatero, así como una moto y una serie de equipamiento de ésta (guantes y botas, fundamentalmente). La SAP de Huesca ha tenido que intervenir corrigiendo esta Sentencia, determinando que la conviviente sí tiene derecho a la propiedad de estos bienes (excepto la moto y su equipamiento) cuyo valor es la nada desdeñable cantidad de 3690,77€⁴³.

A pesar de que es aceptado en la doctrina que el CDFA no otorga derechos sucesorios al miembro superviviente de la pareja estable no casada, bajo mi punto de vista sí se tienen ciertas prerrogativas, pues en el caso arriba indicado, a pesar de que la pareja estable no casada se había extinguido años atrás, y ni siquiera convivían de manera conjunta en el momento del fallecimiento, se ha tenido derecho a una serie de bienes valorados en una cantidad estimable.

42 DELGADO ECHEVERRÍA, J., *Comentarios al...* cit, págs 475 y 476.

43 En particular, afirma que no cabe duda de la condición de ajuar doméstico de todos los bienes cuestionados, salvo la ya comentada situación de la motocicleta, la cual no entra dentro de esta calificación.

Por lo que respecta al segundo de los apartados, su interpretación ha suscitado algunas dudas en los casos donde el causante no ostentaba la propiedad del inmueble, y la conviviente ha pretendido invocar este precepto para hacerse valer del derecho de residencia gratuita en la vivienda. El TSJA ha llegado a tener que dirimir cuestiones de este tipo: por ejemplo, en la Sentencia nº 12/2015 (ECLI: ES:TSJAR:2015:411) que da respuesta a un recurso de casación. El caso planteado es relativamente sencillo: una pareja estable no casada reside en una vivienda prestada por la madre de uno de los convivientes (precario). Cuando éste muere, el miembro superviviente pretende seguir viviendo en este inmueble invocando el art. 311.2 CDFA.

El TSJA, en la resolución 12/2015 anteriormente citada, no deja ninguna duda en cuanto a la interpretación del precepto: la supérstite no puede tener un mejor título de ocupación de la vivienda que el existente antes del óbito de su pareja, de manera que si éste era el de precario, precario será necesariamente el suyo. En consecuencia, si la ocupación de la vivienda se llevaba a cabo durante la convivencia sin título que diera derecho a ella, una vez fallecido el causante consentido, el otro no puede pretender ostentar un verdadero derecho subjetivo para continuar permaneciendo en la vivienda y oponerse a la acción de desahucio por precario ya presentada en este supuesto en primera instancia. El TSJA confirma la Sentencia y declara haber lugar al desahucio por precario.

VI. CONCLUSIONES

Tras el largo análisis que he realizado con motivo de este trabajo, tanto de la regulación de las uniones de hecho en el CDFA como de la jurisprudencia de los Tribunales aragoneses y españoles, la valoración que tengo es similar a la que tenía antes de empezar el trabajo, cuando me encomendé a indagar sobre este fenómeno: opino que el legislador aragonés establece una serie de normas las cuales no respetan el contenido del art. 10.1 CE.

Es cierto, y a los datos aportados en la introducción me remito, que la pareja de hecho es un fenómeno creciente no sólo en nuestro país, sino en el resto de Europa, y que ante esto los legisladores deben estar al corriente de la realidad social para abordar mediante textos legislativos los fenómenos producidos en la comunidad, pero nunca llegando a imponer verdaderas obligaciones a unos sujetos que han decidido libre y voluntariamente no asumirlas (no contrayendo nupcias).

No obstante, es de justicia analizar una por una las decisiones del legislador y los tribunales, pues no todas son a mi parecer excesivas. En primer lugar, en lo que respecta al régimen de convivencia, veo acertado la posibilidad que tiene la pareja estable de regular sus propias relaciones familiares, puesto que son libres de pactar lo que deseen en su ámbito; no obstante, el problema viene cuando nada se ha pactado, y los miembros de la unión se encuentran con una serie de obligaciones las cuales no han suscrito.

En lo que respecta a las normas de regulación supletoria contenidas en el art. 307 CDFA, encuentro controvertido un concepto. Si bien parece lógico establecer que los miembros de la pareja deben contribuir en defecto de pacto a los gastos comunes de manera proporcional a sus ingresos o a su patrimonio, me parece excesiva la consideración que hace el CDFA de los gastos comunes. Éste los considera como aquellos «necesarios para el mantenimiento de la pareja y el de los hijos comunes o no que convivan con ellos, incluyendo el derecho a alimentos, educación, atenciones médico-sanitarias y vivienda».

El concepto que me parece desafortunado es que el precepto incluya dentro de los gastos comunes a hijos que realmente no lo son; esta es la cuestión que creo controvertida. Es cierto que el precepto exige la convivencia del menor con los miembros de la unión, pero no olvidemos que el propio art. 307 en su apartado 4º establece que la responsabilidad por estos gastos es solidaria. Por ello, creo que el legislador debería considerar únicamente en este apartado los gastos derivados de hijos comunes.

Por otra parte, en lo que concierne a los efectos patrimoniales de la extinción en vida de la pareja estable no casada (art. 310 CDFA), me parece inapropiada la previsión contenida en su apartado b). El precepto permite exigir pensión compensatoria cuando el conviviente, aún con algún tipo de retribución (eso sí, debe ser «insuficiente») se haya «dedicado al hogar». En cualquier caso me parece excesivo, puesto que es relativamente sencillo de argumentar una «dedicación al hogar» y obtener así una compensación de tu antiguo conviviente.

En lo relativo al apartado a), este sí me parece un verdadero motivo legítimo para obtener una compensación económica, pues me resulta ensiblemente diferente contribuir de manera económica o con trabajo a la adquisición, conservación o mejora de cualquiera de los bienes comunes o privativos del otro miembro de la pareja estable no casada, a simplemente «dedicarse al hogar».

Por último, en lo que respecta a los posibles derechos sucesorios del superviviente (art. 311), no atisbo ninguna razón para que el legislador incluya dentro de las prerrogativas de éste el derecho al mobiliario, útiles e instrumentos de trabajo que constituyan el ajuar de la vivienda habitual, con total independencia del contenido de la escritura de constitución, del testamento o de los pactos sucesorios. Parecen unos derechos sucesorios si gran importancia, pero hemos visto que el valor de este mobiliario y ajuar en ocasiones puede superar los 3.500 € (por ejemplo, en la Sentencia mencionada ECLI: ES:APHU:2016:48). Además de esto, también encontramos el derecho a residir gratuitamente en la vivienda durante 1 año, de nuevo con independencia de quien ostente la propiedad, medida que en mi opinión puede crear conflictos con propietarios que adquieran la vivienda por herencia y necesiten de su disposición de manera inminente.

En definitiva, opino que hay una serie de arts. en el CDFA (307.3 2º, 310.1 b) y 311) cuya regulación es inapropiada y que corre el riesgo de tener la misma suerte que la mencionada regulación redactada por la Comunidad Autónoma de Navarra, es decir, normas imperativas relativas a la convivencia de hecho que no respetan el art. 10.1 CE relativo al libre desarrollo de la personalidad.

VII. BIBLIOGRAFÍA

-LIBROS:

AUNÉS GONZÁLEZ, A.B., «Estudios sobre el ordenamiento jurídico aragonés», Tomo II, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2003, págs. 911 y ss.

DELGADO ECHEVERRÍA, J., *Comentarios al Código del Derecho Foral de Aragón, Doctrina y Justisprudencia*, Dykinson, Madrid, 2015, págs. 465 y ss.

DELGADO ECHEVERRÍA, J., *Manual de Derecho civil aragonés conforme al Código del Derecho Foral de Aragón*, 4ª Edición, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2012, págs 497 y ss.

MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C, *Curso de derecho civil (IV) Derecho de Familia*, 4ª edición, Colex, Madrid, 2013, págs 289 y ss.

PARRA LUCÁN, Mª A., *Autonomía de la voluntad y Derecho de Familia*, en Autonomía de la Voluntad en el Derecho privado. Consejo General del Notariado, 2012. Tomo I, pág. 290

-REVISTAS:

BORILLO, D, «Uniones libres, convivenciales y conyugales en el Derecho francés», en *Revista de derecho privado y comunitario*, 2014, pág 3.

CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, G.: «Atribución de la vivienda familiar en las parejas de hecho tras su ruptura: ¿siempre en precario? ¿siempre sin aplicar el art. 96 CC?», en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, núm. 28, 2012.

LÓPEZ AZCONA, A., «La atribución del uso de la vivienda familiar en caso de ruptura de la convivencia en el derecho aragonés: Derecho positivo y práctica jurisprudencial», en *Actualidad Jurídica Iberoamericana*, núm. 3 bis, noviembre 2015, págs. 47-79.

PÉREZ UREÑA, A.: «La atribución del uso de la vivienda familiar ante la crisis de las «uniones de hecho» desde la praxis judicial. El art. 96 CC y el juicio verbal por precario en la nueva LEC», en *Revista de Derecho de familia*, núm. 18, 2003, págs. 55-66

SÁNCHEZ-RUBIO GARCÍA, A, La legislación sobre parejas de hecho tras las Sentencias del Tribunal Constitucional 81/2013, de 11 de abril y 93/2013, de 23 de abril, *Revista de derecho civil aragonés*, 2014 pág 185.

SEOANE PRADO, «Los efectos jurídicos de las parejas estables en Aragón», en *Actas de los XXII Encuentros del Foro de Derecho Aragonés*, El Justicia de Aragón, Zaragoza, 2013, pág 395.

UREÑA CARAZO, B: «Ruptura de la pareja de hecho y uso de la vivienda familiar: análisis de la jurisprudencia más reciente», en *Diario La Ley*, 5532/2015, págs 4-6.

- RECURSOS DE INTERNET:

«http://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_es.htm», (20/06/2017 17:02).

«<http://www.notariosyregistradores.com/LEYESEXTRANJERAS/parejasdehecho-parteteorica.htm>» (04/03/2017 20:27)

«<http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/derecho-europeo/normativa-d-e/resumen-del-reglamento-europeo-sobre-union-es-de-hecho-registradas/>», (16/06/2017 20:34)

«<https://www.legalitas.com/abogados-para-particulares/actualidad/articulos-juridicos/contenidos/Las-parejas-de-hecho-en-Espana>», (17/04/2017 17:34)

«<https://thesauro.wordpress.com/2013/10/10/to-be-or-not-to-be-la-existencia-o-no-de-regimenes-matrimoniales-en-inglaterra-y-gales/>», (25/04/2017 16:23)

«https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_Dinamarca» (03/04/2017 18:29)

VIII. ÍNDICE JURISPRUDENCIAL

-STC:

STC de 11 de diciembre de 1992 (ECLI:ES:TC:1992:222)

STC de 8 de febrero de 1993 (ECLI:ES:TC:1993:47)

STC de 11 de abril de 2013 (ECLI:ES:TC:2013:81)

-STS:

STS de 18 de mayo de 1992 (ECLI: ES:TS:1992:3961)

STS de 10 de marzo de 1998 (ECLI: ES:TS:1998:1600)

STS de 27 de marzo de 2001 (ECLI: ES:TS:2001:2513)

STS de 17 de enero de 2003 (ECLI: ES:TS:2003:122)

STS de 17 de junio de 2003 (ECLI: ES:TS:2003:4196)

STS de 1 de abril de 2011 (ECLI: ES:TS:2011:2053)

STS de 9 de febrero de 2012 (ECLI: ES:TS:2012:624)

STS de 13 de julio de 2012 (ECLI: ES:TS:2012:5674)

-TSJA:

Sentencia TSJA de 1 de febrero de 2012 (ECLI: ES:TSJAR:2012:108)

Sentencia TSJA de 18 de julio de 2014 (ECLI: ES:TSJAR:2014:895)

Sentencia TSJA de 21 de octubre de 2014 (ECLI: ES:TSJAR:2014:1384)

Sentencia TSJA de 7 de abril de 2015 (ECLI: ES:TSJAR:2015:411)

Sentencia TSJA de 13 de enero de 2016 (ECLI: ES:TSJAR:2016:4)

Sentencia TSJA 3 de febrero de 2016 (ECLI: ES:TSJAR:2016:87).

-SAP:

1) ZARAGOZA

SAP de Zaragoza de 9 de julio de 2001 (ECLI: ES:APZ:2001:1718)

SAP de Zaragoza de 10 de octubre de 2006 (ECLI: ES:APZ:2006:2877)

SAP de Zaragoza de 11 de mayo de 2010 (ECLI: ES:APZ:2010:1179)

SAP de Zaragoza de 10 de septiembre de 2012 (ECLI: ES:APZ:2012:2119).

SAP de Zaragoza de 4 de mayo de 2016 (ECLI: ES:APZ:2016:2277)

SAP de Zaragoza de 24 de enero de 2017 (ECLI: ES:APZ:2017:97)

SAP de Zaragoza de 16 de mayo de 2017 (ECLI: ES:APZ:2017:889)

2) HUESCA

SAP de Huesca de 12 de febrero de 2016 (ECLI: ES:APHU:2016:48)

-AUTOS:

Auto de 31 de diciembre de 2002 AP de Girona (ECLI: ES:APGI:2002:1350A)

